

Santiago, diez de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos RIT T-88-2022, RUC 2240419301-9, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, por sentencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se rechazó la demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales deducida por don Patricio Alejandro Alfonso Vera Muñoz en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

El demandante presentó recurso de nulidad que fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Chillán, mediante sentencia de cuatro de enero de dos mil veinticuatro.

En contra de este fallo, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en una o más sentencias firmes emanadas de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe contener fundamentos plausibles, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos ejecutoriados que se invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que la materia de derecho propuesta consiste en determinar *“si el carácter de exclusiva confianza de la contrata, nombramiento o designación de un Funcionario Público puede ser establecido arbitrariamente por el empleador, o bien solo puede establecerse tal carácter por medio de una Ley. Estamos frente a una cuestión de derecho, el carácter de exclusiva confianza de un cargo y nombramiento y si este puede atribuirse unilateralmente por quien efectúa el nombramiento, o solo puede establecerse por ley, desde que se trata de un régimen extraordinario que modifica la regla general de propiedad en el cargo, estabilidad en el empleo, así como mantiene un régimen especial de terminación de los servicios”*.

Para el recurrente, la determinación del carácter de confianza exclusiva de un cargo público no está entregado al arbitrio de la autoridad que lo designa, por cuanto debe establecerse previamente por la ley, tal como razonan los fallos de contraste que acompaña, presupuesto que reviste la máxima trascendencia, ya



que su carácter excepcional obliga a realizar una interpretación restrictiva de las normas que los consagran, considerando que se trata de un régimen extraordinario que altera la regla general de estabilidad en el empleo, que asimismo presentan disposiciones específicas referidas al término de los servicios, según lo disponen los artículos 7 de la Ley N°18.834 y 49 de la Ley N°18.575, por lo que se debe concluir que la función para la que fue contratado no presentaba dicha calidad; razones por las que solicita la invalidación de la sentencia impugnada y se dicte la de reemplazo que indica.

Tercero: Que, para la procedencia del recurso de unificación, es requisito fundamental que existan distintas interpretaciones sobre una misma materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se sostengan concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, por lo que se debe constatar si los establecidos en el pronunciamiento recurrido, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados, son asimilables con los propuestos en los de contraste.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance de la norma que resuelve la controversia, enfrentada a una situación equivalente en una sentencia anterior decidida en términos contrapuestos, interpretación que dependerá del marco fáctico asentado en cada caso.

Cuarto: Que, por lo señalado, es necesario revisar los hechos establecidos en la instancia:

1.- El actor, don Patricio Alejandro Alfonso Vera Muñoz, periodista, prestó servicios a contrata en la Secretaría General Ministerial de Gobierno de la Región de Ñuble, del 8 de junio al 31 de diciembre de 2021, vinculación que fue prorrogada para el año 2022.

2.- De acuerdo con la resolución respectiva, el actor debía cumplir funciones “de asesor directo del Secretario Regional Ministerial, lo que lo hace tener una confianza directa y así poder dar cumplimiento efectivo a los objetivos y productos estratégicos de esta Cartera de Estado”; realizaba bajadas comunicacionales, vinculación con el medio y asistencia en la preparación de la agenda del SEREMI y de sus discursos.

3.- El actor mantenía una militancia política opositora al actual gobierno.

4.- Mediante resolución exenta de 9 de junio de 2022, se puso término anticipado a la contrata del actor, por cuanto fue requerido para formar parte del



equipo profesional de confianza de la Secretaría Regional Ministerial, y considerando el cambio de administración el 11 de marzo de 2022 y la consecuente renuncia del SEREMI, se estimó que no contaba con la confianza de las nuevas autoridades para realizar las labores de asesoría directa que prestaba, lo que hacía innecesarios sus servicios, atendido el carácter estratégico de su labor y sin disponibilidad actual de una plaza a la que pudiera ser reasignado conforme a las necesidades del servicio y las competencias personales del funcionario.

5.- No existen antecedentes concretos que permitan concluir la existencia de actos de acoso y hostigamiento laboral, resultando insuficiente la prueba rendida para determinar la fecha en que tales actos se habrían ejecutado, las personas involucradas y circunstancias de ocurrencia de los hechos denunciados, tal como concluyó la Inspección del Trabajo tras la investigación que llevó a cabo, advirtiendo que no fue posible constatar afectación psíquica o psicológica en el denunciante.

Quinto: Que, para la judicatura de la instancia, el actor no está amparado por el principio de confianza legítima debido al tiempo de duración de la contrata, entendiendo que el término anticipado de ésta se encuentra justificado, por cuanto desempeñó funciones de asesor directo del SEREMI, por lo que contaba con su confianza, tal como indica la resolución que lo designó, de modo que al realizarse el cambio de gobierno, se requirió de un asesor afín a la nueva autoridad, medida que resulta justificada y no discriminatoria, y dado que no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales que alegó, decidió rechazar la denuncia formulada.

La Corte de Apelaciones de Chillán desestimó el recurso de nulidad deducido por el actor, fundado en las causales contenidas en los artículos 477 y 478 letra c) del Código del Trabajo, la primera por infracción a los artículos 7 y 89 de la Ley N°18.834 y 49 de la Ley N°18.575, por cuanto, de la sola lectura del fallo, se advierte que las funciones que desempeñó fueron íntegramente analizadas, estimando que el cargo que ejerció era de exclusiva confianza de la autoridad que lo designó, conclusión sostenida en la prueba rendida, especialmente testimonial y documental, y el contenido del decreto de nombramiento que no indicó las funciones que aquél debía cumplir, concluyendo, del tenor del recurso, que la impugnación ataca la ponderación de la prueba, materia que consideró ajena al referido motivo, estimando, además, que el arbitrio



se construyó contra los hechos establecidos en la instancia. En relación con la segunda causal de invalidación, sostuvo que los argumentos que expresa el recurrente se basan, en definitiva, en la infracción de las disposiciones que antes fueron citadas, alegación que corresponde a la causal prevista en el artículo 477 del citado código y no a la interpuesta en subsidio.

Sexto: Que, para confrontar el fallo impugnado, el demandante acompañó los pronunciados por esta Corte en los autos Roles N°75.618-2021 y N°144.282-2020, de 9 de agosto de 2022 y 8 de marzo de 2021, respectivamente, y por la Corte de Apelaciones de Concepción en el ingreso N°47.386-2022, de 3 de agosto de 2022.

En la primera sentencia se estableció que *“siendo un hecho inconcuso que la recurrente fue designada para desempeñar el cargo de Directora de Seguridad Pública de la Municipalidad de Viña del Mar, resulta forzoso concluir que ésta nunca detentó la calidad de funcionaria de exclusiva confianza como lo sostiene el acto recurrido. Al atribuirle tal calidad sin existir norma legal que la sustentare, conforme lo previamente concluido, aparece que el acto deviene en arbitrario e ilegal, desde que atribuye a la actora una calidad que no mantenía, modificando de manera arbitraria e injustificada su régimen de terminación de los servicios, permitiendo que dicho término se fundara en una supuesta renuncia no voluntaria, que en la especie resulta del todo improcedente atendido lo ya señalado y afecta su derecho a la estabilidad en el empleo que mantiene desde que no comparte la calidad de funcionaria de exclusiva confianza como ya se ha asentado”*.

En el segundo fallo se determinó que *“el cargo de exclusiva confianza, no se define por la decisión de la Autoridad a quien sirve el funcionario, sino por el ordenamiento jurídico”*, lo que *“reviste la máxima trascendencia, puesto que, su carácter excepcional, obliga a realizar una interpretación restrictiva de las normas que establecen cargos de exclusiva confianza”*.

En el tercer fallo acompañado se resolvió que *“el cargo de exclusiva confianza se encuentra determinado por ley, y exige comunicar al funcionario dicho carácter al momento de su contratación, dejando constancia de ello, además, en el acto de su nombramiento. En el caso de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, efectivamente el DFL N°139 de 1991 regula la Planta del Personal de la Dirección de Arquitectura, disponiendo en su artículo 1 que son cargos de exclusiva confianza: el Director Nacional de Arquitectura, el Subdirector y los Jefes de Departamento; siendo cargos de*



carrera, en lo pertinente, los demás cargos directivos. Además, la historia contractual narrada tanto en el recurso como en el informe, revela que la única observación que se hizo en cada uno de sus nombramientos es que se trataba de un cargo funcional de Director Regional, mas no que se tratara de un cargo de exclusiva confianza”, agregando, a continuación, que “lo anterior es suficiente para dejar de manifiesto que la recurrida, en tanto órgano público, procedió de un modo distinto al que le señalaba la ley, revelando una actuación ilegal que vulnera el derecho de igualdad ante la ley, al someter al recurrente a un procedimiento de desvinculación distinto del que corresponde a su cargo o función pública”.

Séptimo: Que, para decidir la controversia, se debe tener en consideración un antecedente fundamental que se obtiene de los hechos que fueron establecidos en la instancia, relacionado con la forma como el actor ingresó a prestar servicios en la referida secretaría regional ministerial, por cuanto no fue designado para ejercer un cargo de “exclusiva confianza” como afirma, esto es, de aquellos que la doctrina califica como cargos “directivos o altos funcionarios” (Valdivia, José Miguel, Manual de Derecho Administrativo, Valencia, Tiran lo Blanch, 2018, p. 120) y definidos en el artículo 49 de la Ley N°18.575, sino como contrata para asesorar directamente al SEREMI, preparando su agenda y discursos, entre otras labores, quien presentó su renuncia el 11 de marzo de 2022, por lo que no se justificaba la permanencia del recurrente para continuar desempeñándose en dicha repartición, por cuanto carecía de la confianza de las nuevas autoridades, argumento que se estimó suficiente para terminar su vinculación, constatándose que las expresiones que sustentan sus alegaciones tampoco se contienen en los decretos que dispusieron su contratación y cese de funciones.

Octavo: Que, en efecto, de la lectura de la resolución que nombró al actor a contrata, se observa que fue designado para realizar “funciones de asesor directo del Secretario Regional Ministerial, lo que lo hace tener una confianza directa y así poder dar cumplimiento efectivo a los objetivos y productos estratégicos de esta Cartera de Estado”, en tanto que aquella que puso término anticipado a su vinculación, tuvo presente que la renuncia del SEREMI provocó que los servicios de aquél “no son necesarios”, porque “no cuenta con la confianza de las nuevas autoridades para la realización de labores de asesoría directa..., motivo por el cual sus servicios ya no resultan necesarios para el Ministerio, atendido a lo estratégico de su labor”; es por lo anterior que se decidió a través de una resolución exenta el



cese de sus servicios y no mediante la declaración de vacancia del cargo o una petición de renuncia no voluntaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley N°18.834, que resultaban más acorde con la tesis que sostiene el recurso.

Noveno: Que, por último, se advierte que la tesis que postula el actor únicamente se basa en el empleo de la expresión “confianza” contenida en la resolución que lo designó y cesó en el cargo que ejerció, planteamiento que resulta insuficiente para estimar plausible su defensa en cuanto a tratarse de una de aquellas labores de “exclusiva confianza” que excepcionalmente permite el ordenamiento, constatándose que esta última locución sí fue utilizada respecto de quienes desempeñaron funciones directivas tal como se señaló en los fallos acompañados, según los respectivos decretos de nombramiento o término de funciones, errado tratamiento que motivó la decisión que dio lugar a los recursos deducidos en cada caso.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, aun estimando plausible la postura del demandante, el recurso no se hace cargo del hecho constatado en la instancia relacionado con la ausencia de actos que afectaron las garantías que basan la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, observando que no fue posible establecer fechas, personas y episodios que dieran cuenta de la afectación psíquica que acusa, por lo que en cualquier caso el planteamiento del recurrente no podía prosperar.

Undécimo: Que, tal como se indicó, para la procedencia de este recurso excepcional y de estricto derecho, es necesario que esta Corte se enfrente a una dispersión jurisprudencial para decidir, a continuación, cuál de las interpretaciones divergentes debe prevalecer, siempre que concurren los requisitos de similitud descritos, observándose que la propuesta del demandante no cumple esta exigencia expresamente reconocida en el artículo 483 del Código del Trabajo, razón suficiente para desestimarla.

Por estas consideraciones y disposiciones citadas, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, de cuatro de enero de dos mil veinticuatro.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°2.290-2024.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Andrea Muñoz S., Jessica González T., Mireya López M. y las abogadas integrantes señoras Pía Tavolarí G., y Fabiola Lathrop G. Santiago, diez de marzo de dos mil veinticinco.



En Santiago, a diez de marzo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

